



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00151-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: NATALIA MUÑOZ JIMENEZ
DEMANDADO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E- HOSPITAL VISTA HERMOSA E.S.E.

A través de escrito obrante a folios 88 a 93 del plenario, el apoderado de la parte actora eleva recurso de reposición en contra del auto de calenda 10 de agosto de 2018, a través del cual este despacho judicial inadmitió la demanda.

Conforme a lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se tiene que el art. 242 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos, reza:

“ART. 242.- Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

Conforme a lo anterior, se observa en primer lugar, que contra el auto impugnado no procede el recurso de apelación, pues no está descrito en los artículos 243 y s.s. del C.P.A.C.A., que regulan el tema.

En segundo lugar, y de conformidad con el artículo arriba transcrito, se tiene que la decisión adoptada y que hoy cuestiona la parte demandante, es susceptible del recurso de reposición y se precisa que el mismo fue presentado dentro del término legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso.

CASO CONCRETO

Pues bien, el motivo de inconformidad del apoderado judicial de la parte actora con el auto recurrido, es que en su consideración y contrario a lo señalado en la providencia, según el H. Consejo de Estado, ha sostenido que los asuntos sometidos a conciliación, no pueden ni deben ser una reproducción literal en el texto de la demanda, por lo que a consideración del Profesional del Derecho, a través de petición radicada ante la Subred el 9 de octubre de 2017, se puso en conocimiento a la entidad, lo que la actora pretendía, emitiendo para el efecto, el acto administrativo No. OJU-E-1961-2017, negando todos los pedimentos, a su vez que no concedió los recursos contra la decisión.

Señala, que ante la negativa por parte de la entidad, es el Profesional del Derecho quien tiene y debe entrar a analizar los derechos que le han sido transgredidos a su prohiada por parte de la entidad demandada, por su vinculación mediante contrato de prestación de servicios, y es por ello, que en la demanda se incorporan pretensiones de la demanda cuyo contenido sustancial tienen congruencia con el objeto del asunto y lo pedido en sede administrativa.

Por ello, en síntesis, solicita que se revoque la providencia y se proceda a admitir la demanda.

Vistos los argumentos esbozados por el Apoderado Judicial de la parte actora, procede el Despacho a analizar los mismos, con el objeto de determinar la procedencia o no, de lo pretendido dentro del recurso.

Pues bien, el planteamiento de este Despacho Judicial en el auto impugnado, era que, en el caso de continuar el proceso en la manera como viene promovida la demanda, ello implicaría necesariamente la ineptitud de la demanda de manera parcial, frente a las pretensiones que NO concuerden con el derecho de petición, así como, frente a las pretensiones que no se incluyeron de ninguna manera en la solicitud de conciliación, pues no se podría realizar un estudio de legalidad en cuanto su negativa, al no tener conocimiento la entidad demandada de tales pedimentos.

Pues bien, éste Despacho al analizar nuevamente el escrito de la demanda, junto con el agotamiento en sede administrativa, esto es, el derecho de petición radicado ante la entidad demandada el 9 de octubre de 2017, se observó lo siguiente:

1. Que el Profesional del Derecho no solicitó en sede administrativa, el pago de la indemnización que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990¹.

¹ **ARTÍCULO 99.-** Reglamentado por el Decreto 1176 de 1991. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: **Ver Oficio de fecha 25.11.98. Secretaría Distrital de Salud. Fondo Nacional del Ahorro. CJA09751998**

^{1a}. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. Tampoco lo hizo frente a la petición del pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de los intereses a las cesantías.
3. De la misma manera, no solicitó la indemnización de perjuicios, por el incumplimiento en el suministro de calzado y vestido de labor.²

De acuerdo a lo anterior, es claro que las pretensiones instauradas en sede judicial, exceden lo solicitado ante la administración, motivo por el cual no guardan concordancia las instancias administrativa y judicial.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que debe existir congruencia entre lo solicitado a través del **derecho de petición** que de origen al acto acusado, y lo pretendido en el proceso judicial, pues aunque es posible que quien demanda agregue **fundamentos de derecho adicionales** en sede judicial, **no ocurre lo mismo frente a las pretensiones**, dado que en este preciso ítem, debe existir total correspondencia entre lo conocido por la administración previamente a demandar y lo que se solicita a la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente³:

“La vía gubernativa se torna así en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y los administrados, cuando media un conflicto de intereses, edificándose no sólo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración, cuyo beneficio es de doble vía, pues, constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva, como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que, posteriormente, se ventilará dentro de un proceso jurisdiccional.

² El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

³ El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. Ver Oficio de fecha 25.11.98. Secretaría Distrital de Salud. Fondo Nacional del Ahorro. CJA09751998

⁴ Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

⁵ Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

⁶ Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno Nacional, en orden a:

a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional;

b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.

⁷ Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PARÁGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.

² Folio 42.

³ Consejo de Estado. Providencia adiada 19 de febrero de 2015. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2004-00247.

Igualmente ha anotado esta Corporación que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley, sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial.”

Por lo anterior, es claro para el Despacho, que el apoderado judicial de la parte actora, no puede agregar pretensiones a la demanda que no fueron solicitadas en vía gubernativa, pues la entidad demandada no tuvo la oportunidad de conocer y responder a tal pedimento, pues una vez observado el acto acusado, la Subred fue acuciosa, en el sentido que, atendió cada uno de los pedimentos relacionados con el derecho de petición elevado por la actora el 9 de octubre de 2017, argumentado punto por punto las razones por las cuales no se podía acceder a lo solicitado por la señora Nathalia Muñoz Jiménez, por tal razón, este Estrado Judicial **NO REPONDRÁ** ni **REVOCARÁ**, la decisión tomada en el auto que inadmitió la demanda, en lo que tiene que ver con el agotamiento de la vía gubernativa y lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

Ahora, en lo que tiene que ver con lo solicitado en el agotamiento del requisito de procedibilidad, esto es, en la conciliación realizada ante la Procuraduría 10 Judicial II Administrativa, y las pretensiones de la demanda, debe decir el Despacho desde ya, que **REPONDRÁ** y en consecuencia, **REVOCARÁ** de manera **PARCIAL** el auto de data 10 de agosto de 2018 mediante el cual se inadmitió la demanda, por las siguientes

CONSIDERACIONES

Al respecto, el H. Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección “B”, en sentencia del 16 de junio de 2011, ⁴ señaló:

*“Advierte la Sala que el aspecto central de la citada decisión judicial consistió en afirmar que: (i) la legalidad del acto administrativo no es negociable entre las partes en sede de conciliación extrajudicial; (ii) debe existir una unidad de materia entre lo solicitado durante la conciliación y las pretensiones de la demanda; (iii) **de allí que, si los efectos económicos no fueron discutidos en la audiencia de conciliación, no pueden luego presentarse ante el juez administrativo; y (iv) sin embargo, en estos casos, la demanda no se inadmite sino que el litigio se limita a determinar la legalidad del acto administrativo.**”*

Negrilla fuera de texto

Debe recordar el Despacho, que el apoderado judicial solicitó en la pretensión segunda de la demanda, el pago entre otros, de los siguientes emolumentos: la indemnización extralegal por el despido injusto, la indemnización prevista

⁴ C.P. Gerardo Arenas Monsalve - Demandante: Luis Martin Rodríguez Padilla. Demandado: Bogotá D.C.- Personería Distrital.

en el parágrafo 1º del artículo 29 de la ley 789 de 2002, la sanción moratoria por el no pago oportuno de los intereses a las cesantías y la indemnización de perjuicios por el incumplimiento en el suministro de calzado y vestido de labor.

Por lo tanto, y atendiendo lo manifestado por la H. Corporación, es del caso señalarle al apoderado judicial de la parte actora, que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, solo se **ADMITIRÁ** la demanda frente a las pretensiones económicas que fueron objeto de conciliación, dejando a un lado, la pretensión de pago de los emolumentos descritos en los literales, j), l), o), y p) de la pretensión segunda de la demanda, habida consideración que la administración no tuvo la oportunidad de conciliar sobre estos pedimentos.

Es así que este estrado judicial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º, 230 de la Constitución Política⁵ y los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **REVOCARÁ** de manera **PARCIAL** la providencia objeto de cuestionamiento, en lo que tiene que ver con las pretensiones llevadas a conciliación extrajudicial con las pretensiones descritas en el libelo demandatorio.

De la misma manera, se le indica al apoderado judicial de la parte actora, que una vez subsanada de manera correcta lo referente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de que las mismas deben guardar relación con lo pedido en sede administrativa, se admitirá la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del CPACA.

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Veintiséis Administrativo De Oralidad Del Circuito Judicial De Bogotá – Sección Segunda**

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER y como consecuencia de ello **NO REVOCAR** la providencia calendada 10 de agosto de 2018, en lo que tiene que ver con el debido agotamiento de la vía gubernativa y lo solicitado en las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REPONER y como consecuencia de ello, **REVOCAR** de manera **PARCIAL** la providencia emitida el 10 de agosto de 2018, en lo que tiene que ver con las pretensiones económicas llevadas a conciliación extrajudicial con aquellas pretensiones descritas en los literales, j), l), o), y p) del escrito de la demanda, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de este proveído.


⁵ Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
(...)

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.



TERCERO. Dese cumplimiento a lo dispuesto en auto del 10 de agosto de 2018, de conformidad con los lineamientos expuestos en la presente providencia.

CUARTO. Contra el presente auto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

IV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--